



**CORPORACIÓN ZS S.A.**

---

Bogotá D.C., Enero 16 de 2009

Doctora

**TERESA MOYA SUTA**

Directora Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC

E.S.M.

Referencia: Derecho de Petición.

En ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política y actuando en nombre y representación de la sociedad CORPORACIÓN ZS S.A., en mi condición de representante legal de la misma, según consta en el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá que acompañamos, de la manera más respetuosa nos dirigimos a usted para solicitarle aclaración sobre los aspectos que más adelante describimos, todos relacionados con la prestación del servicio de telefonía a los internos dentro de los establecimientos de reclusión a cargo de esa entidad.

Lo que motiva esta petición es el consistente rechazo del Inpec al Estatuto de Contratación en las últimas adjudicaciones del servicio de telefonía. Consideramos que la alergia a esos lineamientos legales y la ausencia total de características técnicas, han venido lesionando seriamente nuestros intereses como industria nacional que desarrolla y produce sistemas de telefonía específicamente diseñados para el uso de internos dentro de las cárceles, ya que lejos de propiciar una plataforma ética y de competencia leal, que permita la comercialización de nuestros productos entre los prestadores del servicio, ha fomentado la anarquía y el desdén por la eficiencia, idoneidad y economía que deben caracterizarlo.

Por las razones expuestas, le solicitamos respetuosamente contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las medidas concretas que va a dictar, o ha dictado, el Inpec para incluir las contribuciones o ingresos derivados de las contrataciones del servicio de telefonía en su presupuesto?

El artículo 345 de la Constitución Política establece que “*En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas*”. Las participaciones mensuales y las donaciones pactadas en los contratos sobre el servicio de telefonía en favor del Inpec, son a todas luces *contribuciones* que deben figurar en el presupuesto de la entidad.

No solamente no figuran, sino que su ausencia se ha utilizado para justificar la adjudicación del servicio de telefonía bajo la modalidad de contratación directa, alegando que dicho servicio no afecta el presupuesto.

2. ¿Cuáles son las medidas concretas que va a dictar, o ha dictado, el Inpec para cumplir el artículo 111 de la Ley 65 de 1993 que, en concordancia con la Resolución de la ONU 43/173 del 09/12/1988, establece el derecho de los detenidos a la comunicación?



Contrario a lo que públicamente pregona, el Inpec no reconoce ese derecho globalmente. Como es lógico, el derecho a la comunicación lo tienen TODOS los detenidos y no solamente algunos privilegiados. La realidad es que por falta de recursos, hay un porcentaje importante de la población reclusa que no tiene acceso a ningún tipo de comunicación.

La Ley 65, ni la Resolución de la ONU, establecen categorías o estratos. Incluyen todos los detenidos, respetando otro derecho fundamental: El de la igualdad.

3. ¿Es cierto que en algunas cárceles del país el servicio de telefonía se le vende a los internos a través de tarjetas prepago?

Si la respuesta es negativa, respetuosamente le solicitamos explicar lo siguiente:

- a. ¿Por qué en los expendios de las cárceles en las regionales Central, Occidente, Viejo Caldas y Norte, se vende públicamente el servicio de telefonía a los internos a través de tarjetas prepago?
- b. ¿Por qué las empresas con las cuales se contrató la prestación del servicio en las regionales mencionadas, confirman contundentemente lo que usted niega? En una solicitud que formularon al Inpec para que los eximieran del pago del IVA, esgrimieron precisamente su condición de revendedores de tarjetas prepago de Telecom. Esta solicitud y demás documentos se encuentran en los archivos del Inpec y de la DIAN.
- c. Por favor confirme si en su concepto los contratistas del Inpec en las regionales antes citadas, obligados a *“...prestar el servicio de Telefonía, por sus propios medios económicos con plena autonomía técnica y tecnológica...”*, según reza el objeto del contrato, en efecto están cumpliendo cabalmente esa obligación.

Si la respuesta es positiva, respetuosamente le solicitamos indicar lo siguiente:

- a. ¿En cuáles regionales se vende el servicio de telefonía a los internos a través de tarjetas prepago y cuál es la empresa contratista del Inpec a cargo del servicio en cada regional?
- b. ¿Cuál es el nombre de la empresa cuyo servicio de telefonía se vende a través de las tarjetas prepago y qué vinculación tiene con el Inpec para la prestación de dicho servicio?
- c. ¿Por qué la empresa cuyo servicio de telefonía se vende a través de tarjetas prepago, no suscribe, ni figura en los contratos que se otorgaron para prestar dicho servicio en las respectivas regionales?
- d. ¿Por qué el Inpec tolera que los contratistas del Inpec, obligados a *“...prestar el servicio de Telefonía, por sus propios medios económicos con plena autonomía técnica y tecnológica...”*, según reza el objeto del contrato, vendan el servicio que presta un tercero en lugar del propio, como exige el contrato?



- e. ¿Por qué los contratos para la prestación del servicio de telefonía en las regionales donde se vende a través de tarjetas prepago, no se han dado por terminados de acuerdo con el artículo 18 de la ley 80 de 1993?
4. ¿Cuáles son las medidas concretas que va a dictar, o ha dictado, el Inpec para evitar el manejo fraudulento de los depósitos de los internos por parte suya y de los contratistas?

La cláusula 7ª del contrato establece un requisito previo al pago y es que el prestador del servicio *suministre la información del consumo*, negando explícitamente la posibilidad de cualquier pago sin que se demuestre ese consumo, el cual, por si acaso, se determina en minutos, en tiempo de comunicación o en el servicio de telefonía que efectivamente se haya brindado. Jamás en la cantidad de tarjetas prepago que el usuario haya adquirido.

Esta condición previa es lógica, los fondos que se utilizan para pagar el servicio son de propiedad de los internos, no son del Inpec, ni del erario público, y están solo en depósito en las arcas de la entidad.

Transgrediendo lo dispuesto en el contrato, el Inpec siempre paga por adelantado a los contratistas. En todos los casos y antes de que pueda utilizar el servicio, al interno le descuentan en el expendio el valor total de la carga o de la tarjeta prepago y se lo abonan al contratista respectivo en la misma operación. Es decir, le acreditan al contratista el valor respectivo, antes de que el usuario empiece a utilizar el servicio. Se trata, sin duda, de un pago anticipado, figura expresamente prohibida en el contrato, que a su vez se traduce en una utilización abusiva de fondos bajo la custodia del Inpec.

Con las tarjetas prepago ese abuso se convierte en un fraude, puesto que el prestador se embolsilla olímpicamente el monto no consumido cuando el interno es trasladado o sale en libertad y cuando la tarjeta se vence. Tampoco tiene derecho a cambiar la destinación de sus fondos y si desea comprar empanadas en lugar de llamadas, no puede, está prohibido.

Por si fuera poco, las tarjetas prepago, no recargables, como las que se revenden en las cárceles, castigan permanentemente el patrimonio del comprador. El fenómeno se ocasiona por el saldo que obligatoriamente queda en cada tarjeta. Si la tarifa mínima por minuto es de \$400, por ejemplo, y solo quedan \$300 en la tarjeta, el interno pierde ese dinero. No hay manera de recuperarlo, ni de aplicarlo a otra llamada. Este caso repetido diariamente, miles de veces, representa millones de pesos que los internos pierden permanentemente en favor de los prestadores del servicio.

Teniendo en cuenta que se trata de presos que no tienen alternativa, el Inpec está favoreciendo el enriquecimiento ilícito de los prestadores del servicio, al obligar a los internos a utilizar tarjetas prepago con condiciones leoninas si desean hablar por teléfono. Estas condiciones pueden ser normales en el comercio, donde el consumidor compra voluntariamente una tarjeta prepago y nadie lo está coaccionando. Pero, en este escenario, no es solo un fraude, es prácticamente un atraco.



5. ¿Cuáles son las medidas concretas que va a dictar, o ha dictado, el Inpec para subsanar el hecho de que quien suscribió los contratos en representación del Inpec no tenía facultades para hacerlo, en la última contratación del servicio de telefonía a los internos?

Para suscribir los contratos dentro de la modalidad de contratación directa, se adujo que el servicio de telefonía era uno de los *servicios de apoyo a la gestión* de que habla el Decreto 2170 del 2002 y en consecuencia éste facultaba al Director para suscribir los contratos. Como en realidad el servicio de telefonía no tiene nada que ver con los de *apoyo a la gestión*, ni se cumplió ninguno de los requisitos que exige el Decreto para la contratación directa, el argumento esgrimido no tiene validez y por ende nunca existió la facultad del Director para suscribir los contratos con base en dicha norma.

6. ¿Cuáles son las medidas concretas que va a dictar, o ha dictado, el Inpec para corregir la falta de transparencia en el último proceso de contratación del servicio de telefonía a los internos?

El principio de transparencia, que exige divulgar y publicar el desarrollo de todos los procesos de contratación, es un requisito ineludible consagrado en la Ley 80 de 1993. No hay excepciones, salvo las relacionadas con las adquisiciones para la defensa nacional. El servicio público de telefonía para los internos no es, ni puede ser, una de esas excepciones, ni las normas vigentes en la época lo consideraban así.

El Inpec no publicó ninguna información, en ningún medio, sobre el último proceso de contratación del servicio de telefonía, excepto un estudio previo cuyas recomendaciones tampoco se siguieron.

7. ¿Cuáles son las medidas concretas que va a dictar, o ha dictado, el Inpec para subsanar el hecho de que los contratos contienen dos objetos que se oponen entre sí, en la última contratación del servicio de telefonía a los internos?

Según el texto de los contratos, el objeto es “Prestar el servicio de telefonía”. Sin embargo, la mayoría de las obligaciones a cargo de los contratistas no se refieren a ese servicio, sino al control de los expendios y sus productos, como tarjetas prepago, empanadas, cigarrillos, etc. Al leer el contrato, lo primero que salta a la vista es que su contenido regula una actividad muy diferente a la enunciada en el texto del objeto.

El resultado es que se le asignaron a la misma empresa dos funciones: Una oficial, que es la prestación del servicio y, otra ilegal, que es el auto control de su servicio y el de los correspondientes recaudos a su favor. Esta concurrencia de funciones en la misma persona nunca se solicitó, nunca se publicó, es totalmente incongruente y a la postre facilita toda clase de maniobras en contra del patrimonio del Inpec y de los internos.

8. ¿Cuáles son las medidas concretas que va a dictar, o ha dictado, el Inpec para poner fin a la circulación ilegal del *dinero* representado en las tarjetas prepago que se venden en los establecimientos?

Dichas tarjetas se utilizan para comprar toda clase de bienes, servicios, beneficios especiales y hasta a la guardia. Son un medio corruptor que ha sido censurado



reiteradamente por el mismo Inpec, que logró desterrarlo en ocasiones. Este fenómeno es visible y públicamente conocido.

El dinero (Del latín *denarius*), es un intermediario, un bien natural o artificial. Es todo medio de intercambio común aceptado para el pago de bienes y servicios.

Por lo tanto, las tarjetas prepago son el *dinero* que el artículo 89 de la Ley 65 de 1993 prohíbe expresamente. A propósito, en ninguna parte dice que sea solo en efectivo, como aducía torpemente el director anterior.

9. ¿Cuáles son las medidas concretas que va a dictar, o ha dictado, el Inpec para evitar que el anonimato de los autores de las llamadas que se venden a través de tarjetas prepago, siga fomentando la comisión de delitos dentro de los establecimientos?

Los reportes que genera Telecom, la empresa que presta el servicio que se vende con las tarjetas prepago, solo contienen el PIN que se marca para iniciar la llamada. No suministran la identificación de la persona que llama, simplemente porque ese dato es imposible de obtener cuando se usan tarjetas prepago.

Como las tarjetas no se necesitan físicamente para realizar una llamada y solo se requiere el PIN, es muy fácil negociarlos sin ninguna restricción. Esta facilidad, a su vez, anula la posibilidad de rastrear el autor de la llamada.

Al permitir el uso de tarjetas prepago y su libre comercio, el Inpec está cohonestando voluntariamente la comisión de delitos vía telefónica desde las cárceles del país.

10. ¿Cómo planea el Inpec resarcir a los internos por las pérdidas que les ocasiona diariamente la vigencia de los contratos actuales?

Nos interesa saber cómo planea el Inpec devolver a los internos todos los fondos que han pagado y siguen pagando a los contratistas por servicios no prestados y por remanentes en tarjetas prepago.

11. ¿Qué acciones legales iniciará, o ha iniciado, el Inpec en contra de las personas, ya sean naturales, jurídicas, funcionarios públicos o privados, que participaron en la selección y adjudicación de los contratos vigentes, y si la respuesta es ninguna, cuáles son las razones para esa decisión?
12. ¿En el próximo proceso de contratación del servicio de telefonía a los internos, el Inpec abrirá una licitación pública o cuál será el método utilizado de no ser así?
13. ¿En el próximo proceso de contratación se exigirá que los equipos o sistemas utilizados cumplan unas especificaciones técnicas precisas y si es así, cómo y quiénes las definirán?

Acompañamos, a título exclusivamente informativo, un CD que contiene el análisis realizado por esta empresa sobre la contratación objeto de esta petición, así como todos los documentos y normas legales que se citan en el mismo. Creemos que puede ser de alguna utilidad.



CORPORACIÓN ZS S.A.

---

Agradecemos de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

FELIPE ALAMEDA ALVARADO

Presidente (E)

C.C. No 17'146.036 de Bogotá.

Anexo: Lo anunciado

Dirección para notificaciones: La que aparece al pie de cada página.